



Pandemia Covid-19 en Chile

Rubén Clunes Clunes

DOI: <https://doi.org/10.24215/16696581e323>

Pandemia Covid-19 en Chile

Pandemic Covid-19 in Chile

Rubén Clunes Clunes / ruben.clunes@gmail.com

Periodista, Licenciado en Comunicación Social, UNLP. Con 27 años de experiencia en cargos y áreas del periodismo nacional en Chile como Conductor de Noticias, Editor, además de reportero en sectores como Salud, Defensa, Cancillería, Política y Gobierno. Cumplió labores en medios de cobertura nacional como: Radio Chilena, Diarios La Tercera y La Hora, Mega TV, ADN Radio Chile, entre otros, y conductor de programa en Radio Universidad Nacional de La Plata y posteriormente como corresponsal de dicha emisora. Actualmente dedicado a asesorías comunicacionales Institucionales y a personeros de la política.

El avance de la pandemia en el mundo sorprendió a Chile en marzo de 2020, cuando se presentó el primer caso de COVID-19 positivo, a tan solo 5 meses del estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019. Asonada que estremeció al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, quien llegó a bajar hasta un 6% de aprobación ciudadana encarnando la rabia y descontento de sectores populares postergados.

La explosión social, con permanentes manifestaciones callejeras, demandaba superar desigualdades que se arrastran por años, derivadas de un modelo económico neoliberal, donde el consumismo y la meritocracia individual han sido la tónica constante de una amplia clase media con bajos salarios, un alto endeudamiento de las familias y con jubilaciones que impiden vivir dignamente al grueso de los trabajadores que pasan a retiro.

Los niveles de descontento social y desconfianza en la clase política gobernante, con una oposición dispersa sin liderazgos aglutinantes, planteaba un sombrío panorama, en medio de la demanda por salarios dignos, acceso a salud y educación de calidad y gratuita, además de un



cambio al actual sistema de pensiones, entre otras múltiples reivindicaciones. Es en este escenario que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, buscaron una senda de entendimiento para concretar un camino de salida a la crisis, logrando un acuerdo transversal de realizar un Plebiscito para redactar una Nueva Constitución que pone -por primera vez- la posibilidad de cambiar las reglas de organización que rigen al país y que define el modelo de sociedad desde la Constitución dictatorial de Pinochet de 1980.

Sin embargo, el surgimiento y la rápida propagación de este temible virus que derivó en pandemia generó un nuevo vuelco en la sociedad chilena y, transcurridos dos meses, otra incertidumbre se apoderó de la gente, ahora basada en el miedo a contagiarse, a enfermar y morir.

Como sociedad hemos ido comprendiendo que nadie está inmune al virus, pero tampoco a las consecuencias económicas, psicológicas, relacionales o políticas de ella.

En tiempos de crisis los expertos, dirigentes, comunicadores y redes sociales colman de información y debates; ante ello el ciudadano común adopta decisiones y conductas a diario, según el estado del conocimiento posible.

Todos necesitamos confiar en que lo que se está haciendo y lo que se haga es resultado de un proceso de creación de conocimiento responsable, humilde y participativo.

Sin embargo, la realidad de Chile dista de esta vinculación con una mirada estratégica que atienda la preocupación de aquellos sectores que pueden aportar a un manejo más adecuado de esta crisis sanitaria, traducirla en una política pública única y coherente.

Múltiples actores han ofrecido su colaboración en todos los ámbitos del debate y todos los niveles de gestión territorial, pero en la práctica no existe una definición política de participación institucional. Se impone la desconfianza y se desaprovechan conocimientos y voluntades. Se impone con arrogancia el autoritarismo o el populismo.

La confusa información a través de distintos canales, replicada en redes sociales, y la información contradictoria por momentos, proporcionada por el propio Gobierno, provoca una natural ansiedad en la población más consciente del peligro. No obstante, un grueso de la ciudadanía actúa como si no existiese riesgo de contagio y - en muchos casos - desobedeciendo disposiciones sanitarias para evitar aglomeraciones. Todo ello derivado de la falta de confianza en sus autoridades.



Los medios de comunicación tradicionales, en su intento por interpretar la oleada de antecedentes de esta enfermedad, a un lenguaje entendible por el ciudadano común, no han estado exentos de problemas, derivados del control informativo de los datos proporcionados por el Ministerio de Salud, cuyo titular Jaime Mañalich, médico y amigo del Presidente, se ha visto enfrascado en distintas polémicas no sólo con políticos, sino también con el mundo académico, científico y la prensa, respecto a la metodología empleada para contabilizar los casos que se han generado y las razones para definir cuarentenas territoriales selectivas.

En las primeras semanas de propagación de este virus en el país, y ante la incertidumbre de su impacto en la población más sensible, fueron los alcaldes, quienes en contacto directo con la ciudadanía en los barrios, acogieron los temores de la gente y de la comunidad educativa por un posible contagio masivo en escuelas, por lo que presionaron para que se suspendieran las clases en sus municipios (o comunas), clamor al que se sumaron los gremios del sector y exigieron que se dispusiera una cuarentena preventiva total.

Los alcaldes son la única instancia pública que cuentan con la aprobación de la ciudadanía. Su nivel de respaldo supera el 70%.

El gobierno analizando el creciente número de casos y para asumir el control sanitario, lo que para algunos analistas locales fue una reacción un tanto tardía al manejo de la crisis, decretó “estado de catástrofe nacional” por tres meses.

Con atribuciones excepcionales para “dar mayor seguridad a hospitales y sitios de atención de salud; proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos; facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico, y la evacuación de personas; resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social; garantizar la cadena de producción y distribución asegurando el normal abastecimiento de la población, y proteger y resguardar las fronteras”, según lo explicó el propio Presidente Piñera.

Una de las primeras medidas bajo este régimen excepcional fue disponer a nivel nacional un toque de queda, entre las 22:00 y las 05:00 horas, limitando el tránsito de las personas durante varias horas en la noche, la suspensión de clases en los colegios, el cierre de fronteras por 15 días y el cierre transitorio de centros comerciales, salvo aquellos negocios con productos de primera necesidad, para mantener abiertas las redes de producción y distribución. En este Estado de Excepción, reaparecen las Fuerzas Armadas en las calles que para muchos rememoran los tiempos de la dictadura.



Esta epidemia agudizó - en las últimas semanas - el efecto negativo en la economía que originó el estallido social de octubre de 2019 y que había ocasionado la pérdida de autoridad y protagonismo del gobierno. Sin embargo, con este nuevo escenario de emergencia sanitaria, la administración Piñera recupera terreno, volviendo al centro del poder, a través de medidas que le han permitido - hasta ahora - un control relativo de la epidemia, pese a críticas, obteniendo un moderado repunte en su aprobación.

Pero este año 2020 y según proyecciones del Banco Central chileno, la caída del producto podría significar un 2.5%. Sin embargo la directora del FMI, planteó que el mundo entra en una recesión sólo comparable con la de 1929. (*1)

En materia social la crisis actual se caracteriza por un aumento sostenido de la desocupación y en los que siguen ocupados, es altamente probable una caída significativa en sus ingresos. En resumen, Chile enfrenta la más profunda crisis desde el retorno de la democracia.

Se suma a ello una oposición política dividida, en al menos 5 sectores, a saber: una oposición agrupada en la denominada Convergencia Progresista (que integra al PPD, al Partido Socialista y al Partido Radical); una oposición en el bloque denominado Unidad por el Cambio (Partido Comunista, Partido Progresista y Fuerza Regionalista Verde Social); una oposición en torno a un sector denominado Frente Amplio, (constituido por Revolución Democrática, Partido Liberal, Convergencia Social y Partido Comunes), y – finalmente - los que se retiraron de dicho Frente Amplio y serían una quinta oposición (Partido Humanista, Partido Igualdad y diversos movimientos).

Así las cosas, parte importante de esta oposición plantea que es en esta etapa de incertidumbre y crisis, el momento para buscar acuerdos con el gobierno y la generación de herramientas para enfrentar la pandemia antes que sea tarde y se presente el mayor nivel de contagios y enfermos, para encausar institucionalmente los problemas ya descritos.

La polémica en el manejo de este trance mantiene abierta distintas hebras, lo que causa contradicciones en el propio Gobierno ante las medidas que se anuncian públicamente, dejando al desnudo que se privilegia un criterio economicista por sobre el cuidado de la salud y bienestar de las personas.

Las cuarentenas selectivas y que no han considerado la restricción - especialmente en municipios con barrios densamente poblados y populares - de donde provienen mayoritariamente los trabajadores, ha provocado aglomeraciones en el transporte público y en



aqueellos servicios que atienden aspectos bancarios, financieros y atenciones sociales. Aumenta así la proyección de contagios con resultados insospechados.

Se suma a ello que en barrios más precarizados, no existen las condiciones para realizar una cuarentena con las medidas sanitarias adecuadas, al existir hacinamiento de grupos familiares en viviendas pequeñas y con poco espacio que permitan mantener el distanciamiento físico de potenciales infectados y personas sanas.

La contracción económica ha ocasionado una ola de despidos incrementando la angustia de las familias en los barrios populares, donde comienza a escasear la ayuda básica alimentaria y donde también predominan quienes trabajan de modo informal, en oficios con los que obtienen ingresos de subsistencia diaria.

Las pequeñas y medianas empresas que han sido las que han generado empleos y han sostenido la actividad productiva por años, hoy naufragan en este sombrío escenario; en contraste, el gobierno ha privilegiado sus esfuerzos en apoyar a la banca privada y las grandes empresas.

Esta cruda realidad evidencia las inequidades territorial y social fruto del modelo económico, y donde los empresarios junto a las autoridades de gobierno han insistido en el necesario retorno progresivo a una “nueva normalidad”, manteniendo medidas de autocuidado, para evitar contagiarse y no paralizar la actividad productiva. Iniciativas recibidas con escepticismo por la ciudadanía, según los sondeos realizados por Activa Research, empresa que mensualmente consulta temas contingentes.

A modo de ejemplo, en su sondeo de abril un 74,3% de la población considera que se debería suspender el semestre académico y retomar las clases escolares cuando termine el invierno, mientras un 74,6% rechaza el plan de apertura de comercios y mall que se dispuso en los últimos días.

Se mantiene así un panorama con muchas incertidumbres mientras no llegue lo peor de la epidemia, escenario previsto en pleno invierno cuando se sumen al COVID-19 las enfermedades tradicionales de esta época, como infecciones respiratorias agudas, gripes o influenza, que afecta a la población más sensible, adultos mayores, niños y pacientes con males crónicos, para las cuales sí hay tratamientos o vacuna.

En lo político, se aplazaron para el 11 de abril de 2021 las elecciones de Alcaldes, Concejales, Gobernadores y Constituyentes, que estaban programadas para el próximo 25 de octubre. Y



ese domingo, se realizará el Plebiscito que aprobará o rechazará el trámite de una Nueva Constitución, que debía realizarse el pasado 26 de abril y postergado, a raíz del brote epidémico de COVID-19.

Pero se mantiene la expectativa sobre su realización, tras recientes señales del propio gobierno de pretender postergarlo, según evolucione la pandemia y también por el impacto económico que sufre el país, razones que abrieron un nuevo flanco de discusión.

Más aún porque en octubre de 2021, debe elegirse a un nuevo presidente y a los parlamentarios para un nuevo Congreso, razones más que suficientes para dar cuenta que Chile atraviesa una profunda crisis no sólo sanitaria.

Desde marzo, la coyuntura cambió. El estallido social fue reemplazado por la pandemia, las calles se vaciaron y el país enfrentó la crisis, pero esto no puede entenderse como una superación del malestar e incomodidad social. Tampoco puede interpretarse como un aumento de la aprobación al oficialismo. En el palacio de gobierno se exhibe con cierto exitismo el repunte en las encuestas, pero en el mejor de los casos, puede traducirse como una recuperación parcial de la votación que trajo a la Presidencia a Sebastián Piñera. Los distintos sondeos de opinión evidencian que el país rechaza de modo mayoritario su gestión y en particular, la de la pandemia.

Parte del desorden comunicacional son evidentes a través de anuncios precipitados y contradictorios como el llamado al retorno al trabajo a los empleados públicos y, eventualmente, a los del comercio.

Demostraciones de arrogancia como el que planteara el gobernante al sostener que “desde enero estaba todo planificado” para afrontar el brote epidémico y en la práctica, distintos sectores reclaman que no han sido considerados ni escuchados para abordar con una estrategia ordenada y clara, mantienen tensiones cotidianas.

Gremios como el Colegio Médico han hablado de una falta de transparencia en la manera del Ejecutivo a la hora de entregar información sobre la pandemia. Organizaciones de académicos y científicos que participaban de una mesa de colaboración en apoyo a la crisis, cuestionaron la disponibilidad de datos para elaborar estadísticas serias, generándose un quiebre con especialistas en Virología, aumentando la incertidumbre de la realidad que vive Chile.

Las semanas y meses que se avecinan anuncian tiempos difíciles: habrá más contagiados, también más desempleados. La cadena de suministros se verá afectada, la cadena de pagos



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

también. Esto lo sufrirán en especial las familias populares y de clase media, las que carecen de reservas, mientras predomine la incertidumbre y no exista una conducción clara e institucionalizada, que ayude a recuperar la confianza de la ciudadanía.

Nota (*1) Ese fue parte del duro pronóstico que hizo público el pasado martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) producto del impacto del covid-19, la cual estima que la región en su conjunto se contraerá este año 5,3%, siendo los países más afectados Venezuela (-18%), México (-6,5%), Argentina (-6,5%), Ecuador (-6,5%), Nicaragua (-5,9%) y Brasil (-5,2%). Chile, por su parte, anotaría un retroceso de 4%.

Video:

<https://youtu.be/EUszpGEWTBs>